Globethics Repository



Alberto Fujimori, entre el Ying y el Yang [Alberto Fujimori, between Yin and Yang]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Ugarteche, Oscar
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-10 20:22:55
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220537

NUEVA SOCIEDAD NRO.118 MARZO- ABRIL 1992 , PP. 125-131

Alberto Fujimori, entre el Ying y el Yang

Ugarteche, Oscar

Oscar Ugarteche: Economista peruano, consultor de organismos internacionales en asuntos de deuda externa. Autor de diversas publicaciones sobre su especialidad.

Celoso del poder aunque inseguro en las decisiones, trabajador infatigable pero también impredecible, con una desconfianza innata hacia la gente que eventualmente lo rodea, Alberto Fujimori lleva adelante en el Perú un ajuste estructural sostenido por los sectores de la inteligencia militar. Mientras tanto la pobreza, la violencia y las políticas erráticas van condicionando los escasos canales de comunicación entre el Presidente y los ciudadanos

El segundo de cinco hermanos, sufrió la persecución contra los japoneses a partir de 1941, cuando comenzó la guerra con Japón. La colonia japonesa fue perseguida durante los seis años siguientes, víctima del racismo y de una política intencional de agresión ciudadana. Los Fujimori, por pobres, no sufrieron despojo pero sí discriminación.

Estudiante del Jaochi, colegio para niseis, debió pasar a colegios fiscales de donde se graduaría como buen estudiante. Más tarde estudia en la Universidad Nacional Agraria (UNA), graduándose en 1960 como ingeniero agrónomo. Hizo su maestría en la Universidad de Wisconsin y su Doctorado en matemáticas en la Universidad de Estrasburgo (Francia). A su retorno fue profesor de la UNA y luego rector de 1984 a 1989.

Al dejar la Universidad había invertido siete millones de dólares en programas de desarrollo pero no dejó mayor cosa en caja. Conocido por estudioso, aplicado y neurótico, hombre de pocas palabras, menos gestos, carente del sentido del humor y de los afectos. Recto, trabajador y manipulador, reconocido por estar despojado de lealtades o compromisos salvo, quizás, los del poder. En una palabra, es un hombre inescrutable.

El ying y el yang

Tuvo un programa de televisión, «Concertando», en el canal estatal durante la presidencia de Alan García y dejó la imagen de una persona que buscaba construir consensos sociales: «sobre bases técnicas es posible ponerse de acuerdo». Vinculado al gobierno de García, solicitó ingresar en la lista de parlamentarios de Alfonso Barrantes, de la izquierda, para las elecciones de 1990, antes de lanzarse solo.

«Fujimori sabe que sin sustento popular va a ser difícil estabilizar un gobierno que va a ser flanqueado por los partidos tradicionales», señaló Carlos Franco en un artículo de inicios de 1990. Sin embargo, no buscó alianzas electorales mostrando desprecio por los partidos políticos de las derechas e izquierdas. La percepción que dio fue que representaba los sectores populares amplios en su espíritu más limpio.

AFF fue elegido por un voto contra su contrincante del FREDEMO, Mario Vargas Llosa, antes que por un voto a su favor. Ganadas las elecciones, su base de poder son las fuerzas armadas y en particular los servicios de inteligencia. Con dos asesores presidenciales que vienen de Inteligencia de la época del gobierno del general Morales, uno de los cuales fue expulsado del ejército por traición a la patria y que se haría conocido por abogado de narcotraficantes, no es difícil entender el modo como se animó este sustento. El ala más conservadora, opuesta a las relaciones militares con la ex-Unión Soviética, y a favor de mejores relaciones militares con Estados Unidos es la que apoya a Fujimori y que se expresa en estos asesores presidenciales.

El autoritarismo actual consiste en convertir al ejército y las fuerzas armadas en aliados y actuantes en lugar de fuerzas tutelares. La política de derechos humanos y de drogas reflejan esto. Dicho rasgo puede estar basado en parte en la cultura japonesa y en parte en la condición de migrante pobre perseguido. Con inseguridad de clase, sin estructura ideológica política articulada, y con un castellano de difícil dicción, busca permanentemente los referentes seguros fuera de sí.

Para presentarse en ambientes desconocidos intenta acompañarse de alguien que le dé seguridad. Por ejemplo, al asistir a un cóctel de la Subsecretaría General de Naciones Unidas, entre la primera y segunda vuelta electoral, pidió a último minuto a un asesor que lo acompañara. Lo usual hubiese sido que fuera con su esposa.

La posibilidad de cambio de postura sin incomodidad ni deslealtad parte de esta característica. De este modo sus propias contradicciones son partes de un todo que

forman su identidad política. Esto es socialmente compatible únicamente a través del autoritarismo al crearse reacciones adversas de un lado o del otro del espectro político.

Para resolver las contradicciones que genera busca la confrontación. Todo aquel que no esté de su parte, es decir de la parte dispuesta a jugar a todos los juegos, es considerado como enemigo, traidor, infantil y por tanto sujeto de confrontación. Esta es al fin y al cabo resuelta de acuerdo a la noción de autoridad, recurriendo invariablemente al respaldo militar.

De esta forma, por ejemplo, buscó el apoyo de las izquierdas para ser elegido contra su contrincante de derecha liberal, prometiendo hacer algo radicalmente diferente que lo que el otro candidato planteaba. Sin embargo, inmediatamente luego de salir elegido buscó a las derechas para gobernar y tomó el programa de gobierno de su adversario como propio. Inmediatamente trasladó su base de operaciones del Hotel Crillón al Círculo Militar. Para AFF, esto es buscar consenso. Es el consenso de su propia contradicción y vacíos.

Atento al escuchar a sus asesores, toma nota en papelitos cuadrados durante toda la sesión de trabajo. Infatigable, las sesiones suelen durar hasta las tres o cuatro de la mañana. Sin embargo, esos papelitos son echados al tacho de basura, casi a la misma velocidad con la que echa al tacho del olvido a sus asesores y a sus ministros.

Capaz de rodearse de personas de talento, preocupadas por el destino nacional, es incapaz de tolerar ministros cuya popularidad sea mayor que la propia. Es igualmente incapaz de tener equipos de asesores nacionales. Si lo dice el Fondo o el BID, tiene que ser lo correcto y es bueno. La seguridad presidencial sobre el apoyo internacional se basa en su creencia de que Japón aportaría 4.000 millones de dólares en octubre de 1990 - o en un futuro cercano - y en que cumplir las reglas del juego sin mediar los intereses nacionales en lo menor, garantizaría dicho apoyo.

Sobre la economía y el ajuste

«Primero haz y después explica».
(Recomendación de AFF al ministro de Economía)

Durante la campaña electoral el Presidente dijo: «no se puede iniciar ninguna transformación sustancial en el país si primero no se le da de comer a la

población... La pobreza es la principal causa de la violencia en el Perú». Esto quedó registrado en Página Libre de Lima.

Frente al ajuste económico ortodoxo liberal anunciado por el FREDEMO, Fujimori habló de un ajuste económico que tuviera consenso nacional. «Reducir la demanda de los consumidores puede funcionar en los países desarrollados. Pero en esos países no hay tan alto nivel de desempleo ni tan bajos salarios. Las premisas de aquel método no funcionan aquí», afirmó en una entrevista a La República de Lima.

Preguntado sobre el escaso apoyo que tenía de los sectores empresariales, soporte del FREDEMO en la campaña, aseveró: «No todo el empresariado está con ellos. Las medidas neoliberales los harían quebrar... nuestras propuestas tendrán que ser escuchadas (por los empresarios)... En las condiciones de nuestra economía, no podemos abrirla de un solo golpe».

No obstante, en los últimos 13 años se han ensayado 45 programas de ajuste. La aplicación del shock de agosto de 1990, por consiguiente, encontró un Estado muy débil, con pocos recursos para financiar el ajuste y un fuerte deterioro de la infraestructura pública.

El programa económico puesto en marcha por el gobierno del presidente Fujimori ha sido aun más liberal que el planteado por su adversario político. Presenta dos etapas bastante diferenciadas. La primera, liderada por el presidente del Consejo de ministros y ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, empezó en agosto de 1990 y culminó en marzo de 1991.

En esta etapa, considerada de emergencia, se aplicó el más severo programa de ajuste financiero de toda la historia económica del país. El objetivo esencial fue reducir la inflación corrigiendo al mismo tiempo los desajustes en los precios relativos de los bienes y servicios. Se reiniciaron las negociaciones con los organismos internacionales de crédito y se lanzaron, aún tímidamente, algunas medidas de corte estructural.

La segunda etapa es impulsada por el ex-premier Carlos Torres y Torres Lara y el ministro de Economía Carlos Boloña Behr. Empezó en marzo de 1991 y se prolonga hasta la fecha. El objetivo en esta etapa es dejar a la economía de mercado la tarea de organizar las relaciones de producción. Subyace en el planteamiento la noción de que el mercado es mejor asignador de recursos que el Estado. Se plantea como la más alta prioridad la normalización de las relaciones con los acreedores interna-

cionales en una secuencia que comenzó con los organismos multilaterales, siguió con el Club de París y que debe concluir en negociaciones con la banca privada y los acreedores de Europa del Este.

El punto culminante de la arremetida liberal del ministro Boloña y del gabinete del presidente Fujimori ha sido la avalancha de 126 decretos emitidos por el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso para reformas económicas. Algunos de estos decretos han sido duramente cuestionados por el Parlamento quien ha dispuesto la derogatoria de varios de ellos generándose una clara situación de enfrentamiento de poderes.

El Presidente confrontó con el Poder Legislativo por no aprobar los decretos que el Poder Ejecutivo emitió y aun amenaza con disolverlo. Evidentemente, luego dio marcha atrás en sus declaraciones e invocó a llamar a elecciones para reemplazar a los legisladores, diluyendo así la atención sobre los decretos legislativos en cuestión.

Si bien este conjunto de decretos legislativos modificará sustancialmente el marco normativo e institucional bajo el cual se ha regido la economía hasta la actualidad, es todavía prematuro efectuar una evaluación seria de los mismos. Se puede afirmar que violan la constitución de la República los decretos que derogan la reforma agraria, la gratuidad de la enseñanza, privatizan la seguridad social, anulan la estabilidad laboral, modifican las reglas del juego al capital extranjero y disuelven la banca de fomento, entre otros.

Lo peculiar es que al amparo de facultades para reformas económicas introdujo en el paquete prácticamente todo lo que su equipo de asesores tenía en mente.

Lo social. Un zumbido en la oreja

El Presidente, en entrevistas a medios de prensa dijo: «Nosotros proponemos un programa de desarrollo social. Se trata de apoyar a las microempresas familiares y crear nuevos puestos de trabajo (...) Fuimos claros al afirmar nuestra defensa de la estabilidad laboral».

Sin embargo, las políticas de ajuste y de manera muy especial las de agosto de 1990, han tenido un severo impacto en el bienestar de la población en general y de la niñez en particular, que ya no puede esperar los años que - según se dice - necesita el programa de ajuste. El 17% del total de hogares de Lima Metropolitana en

1986 estaban considerados en situación de pobreza. La cifra se eleva al 44% en julio de 1990. Es decir, cerca de la mitad de las familias de Lima no ganaba lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Después del ajuste de agosto de 1991 el 60% de la población del país pasó debajo de la línea de la pobreza.

Quizá lo peor de todo es que - según datos de 1989 - en los hogares pobres se encontraba la absoluta mayoría (73%) de niños menores de cinco años. A nivel nacional, el 38% de la población es menor de 15 años; de éstos, el 68,7% se encuentra en estado de pobreza absoluta. En áreas rurales las cifras llegan a 90,4% y en las áreas urbanas el 57,6%.

En estos hogares el afán de elevar el nivel del ingreso familiar ha llevado a aumentar el número de niños que trabajan en un 133%. Esto se puede observar también en el aumento del número de «niños de la calle» en todos los distritos de Lima. La falta de recursos del Estado impide que las dependencias que ven problemas de tutoría (fuerzas policiales y Poder Judicial) puedan realizar su trabajo y averiguar los antecedentes de los niños encontrados en la calle. Por otro lado el apoyo del Estado a los proyectos de protección infantil (hogares, institutos, etc.) está desapareciendo.

Desde 1988 se plantea la necesidad de un Programa de Emergencia Social (PES). La aplicación del paquete de medidas 1990 provocó una duplicación de la pobreza, lo cual forzó a atender a los grupos más afectados por el shock en los campos de alimentación, salud y empleo. El Programa se presupuestó en 200,1 millones de dólares entre agosto y diciembre de 1990. Realmente sólo se cumplió con 28,014 millones, es decir, el 14% del total calculado.

Desfinanciado, el PES se extendió, a gotas, hasta febrero de 1991. De ahí en adelante prosiguieron las medidas estabilizadoras sin que el Gobierno suponga urgente preocuparse de los efectos sociales de las medidas. Para 1991 ha presupuestado solamente 41 millones de dólares dirigidos a este Programa de Emergencia. Sin embargo, con gusto el ministro de Economía ha anunciado que esa cuenta «está en azul». Hay un superávit en el uso de los recursos para los sectores más pobres.

Realmente el Ejecutivo no previó un Programa de Emergencia, porque con el equipo económico original el Presidente planteaba reducir la inflación gradualmente. Ganadas las elecciones prescindió de su equipo económico y asumió al equipo del FMI. De este modo, el programa social de emergencia fue diseñado y organizado recién luego de asumir el Gobierno. Nada más lejos del Fondo Social de Emergencia puesto en práctica en la experiencia boliviana.

Actualmente las organizaciones populares de pobladores, utilizando donaciones internacionales de alimentos, intentan paliar la grave situación. Pero esto es insuficiente. Sólo un indicador al respecto: alrededor del 20% de la fuerza laboral gana un salario mínimo vital, del cual solamente para desplazarse a sus centros laborales gastan el 50% de sus ingresos. Sin un programa amplio que implique subsidios específicos es imposible siquiera mantener el nivel de pobreza pre-existente al shock.

Sobre los derechos humanos

«No se puede discutir lo que no se tiene y no se puede discutir un convenio pactado»
(explicación de AFF al Congreso de la República acerca de por qué no se discutió el Convenio Anti-Drogas).

El espíritu del discurso de Fujimori sobre derechos humanos durante la campaña giró en torno a la modernización. «Esto significa afirmar la igualdad de los derechos dentro de la misma diversidad y adoptar un modelo de desarrollo comunitario y cultural de las naciones del país».

En una postura claramente anti-bélica afirmó, «El Ejército debe actuar con las armas del desarrollo (...) Todos debemos unirnos, la lucha no es entre los peruanos, es contra la crisis, el hambre y la hiperinflación».

Durante la campaña, Fujimori hizo explícito que la situación de pobreza extrema en que se encontraban siete millones de personas constituía una de las bases del terrorismo. No resulta claro qué piensa luego de haber duplicado la pobreza nacional.

El Perú está caracterizado como un país con un problema de violencia estructural. Aunque la pobreza no es necesariamente una causa de violencia, en una situación en que la violencia es extensiva y estructural, es muy probable que la magnitud de la crisis económica la agrave.

Aunque es difícil distinguir con cifras, hay dos maneras en que se supone que la crisis puede aumentar la violencia. Primero, en el crecimiento y agudización de la pobreza, que deja más y más personas sin otras alternativas que la delincuencia. Segundo, es la alternativa de violencia política de ambos lados. Mientras que la gente no ve que el gobierno pueda mejorar sus condiciones, hay más posibilidades

de que se vea alternativas en las propuestas de Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

Por su parte, el Gobierno, que ya tiene una historia pésima en derechos humanos, puede aprovechar la presencia del terrorismo para silenciar protestas legítimas y democráticas. En la huelga magisterial que duró de marzo a agosto de 1991, por ejemplo, la cuestión de la influencia o no de Sendero fue constante. Desde 1983 se inició la política anti-subversiva por parte de las FFAA. La estrategia militar consiste en una represión generalizada en el campo. Torturas, fosas clandestinas, robos, violaciones e incendios, son los elementos del escenario. En el último año el componente urbano ha crecido y se observa la actuación de fuerzas paramilitares en Lima.

De otro lado, la violencia ha dejado un sector importante de niños huérfanos, muchos de ellos con problemas de orden psicológico al haber presenciado el asesinato de padres y parientes. Son menores que se insertan en ambientes sociales y culturales desconocidos, sin puntos de apoyo familiares y con una tremenda experiencia traumática a cuestas. Sobreviven trabajando o mendigando, pero en sus relaciones sociales queda la marca de la experiencia vivida. Según informan promotores de CEDCA, los tradicionales juegos de «policías y bandidos» han sido reformulados en enfrentamientos entre «terrucos y marinos», donde la muerte es resultado natural del Juego.

Desde el punto de vista económico, debe considerarse los resultados de los atentados terroristas contra instalaciones y personas con el fin de evitar toda forma de desarrollo regional y nacional (que desde la perspectiva de Sendero no es más que la profundización del «capitalismo burocrático» impulsado con ayuda «imperialista»). Es desde esta óptica que debe analizarse la destrucción total del fundo Allpachaca - centro de experimentación en ganado de la Universidad de Huamanga - y recientemente del Centro de Investigación Hortícola de Huaral, en el norte de Lima, o el asesinato de los cooperantes franceses y japoneses. Estos son algunos pocos hechos notables de una larga lista a citar.

Del mismo modo, las acciones de sabotaje y terrorismo han afectado sustantivamente la infraestructura estatal - principalmente torres de alta tensión - en un monto que entre 1980 y 1990 ha costado al país la cifra de 26.321 millones de dólares, cantidad cercana al doble de la deuda externa actual del Perú. A ello habría que añadir el costo de los días de fluido eléctrico perdido. A nivel del país, durante 62

días de 1989 no hubo fluido eléctrico; en 1990 fueron 66 días. Las pérdidas que en la producción se calculan por estas razones son de millones de dólares.

Finalmente, el número de muertos en el conflicto armado ha sido creciente. En su mayoría no son miembros ni de las FFAA ni de los grupos subversivos, sino sencillos campesinos. El cuadro indica que el 42% del total de 17.806 muertos reconocidos en la guerra son civiles. Sin embargo esta cifra de civiles puede ser mayor si se considera que en la información de presuntos subversivos dada por el Ministro del Interior ha de existir un porcentaje de inocentes.

Los años 83-84, precisamente cuando las FFAA hacen su entrada en Ayacucho, es uno de los períodos de violencia más encarnizada. Según información oficial en estos dos años se habría logrado aniquilar el 21% del total de subversivos muertos en toda la década. Lo que inevitablemente surge es la duda de que estos casos sean de senderistas, cuando Sendero no enfrentó a las fuerzas del orden sino que se replegó a las zonas altas. Otro período igualmente sangriento son los años 1988-89 lo cual sugiere que, más que una derrota de SL o el MRTA, no ha habido un cambio significativo en la estrategia antisubversiva.

Muertes en el Perú por violencia política
1980-1990

Años	FFAA y FFPP	Autoridades	Civiles*	Subversivos
1980	---	---	2	9
1981	6	---	5	71
1982	32	11	41	109
1983	61	27	665	1226
1984	82	35	1750	1721
1985	76	19	712	630
1986	129	43	423	781
1987	192	40	363	341
1988	280	86	739	404
1989	338	116	1249	1175
1990	298	**	1531	1879
1991 (enero)	31	**	56	32
Total	1.525	377	7526	8378

* Aquí se consideran los 3 casos de religiosos y 10 extranjeros asesinados hasta 1989.
** Desde 1990 las autoridades, religiosos y extranjeros aparecen en la población civil.
Fuente: DESCO

En estas zonas rurales en conflicto, la confrontación entre la subversión y el ejército o la policía ha generado una fuerte migración hacia las ciudades con el abandono de las tierras, el incremento del número de niños huérfanos, etc. Asimismo cabe re-

saltar que ininterrumpidamente, desde 1986, la cifra de víctimas de la violencia es creciente, con un aumento fuerte en los primeros meses de este año.

De la misma manera el número de atentados se ha intensificado paulatinamente. Hasta diciembre de 1990 el Ministerio del Interior ha contabilizado un total de 19.409 atentados subversivos. El balance de la década pasada indica que tales reacciones se han concentrado en los departamentos de Lima (24%), Ayacucho (20%) y Libertad (10%). Es interesante destacar al respecto que desde 1986 Lima desplaza a Ayacucho como centro de atentados.

El avance de la subversión en el país es innegable. A fines de 1991, 40,4% de la superficie del país se encuentra en estado de emergencia, lo cual involucra total o parcialmente a 14 de los 24 departamentos del Perú; afectando al 56% de la población, es decir, a 12.536.173 habitantes.

Al mismo tiempo, no es siempre claro quiénes son autores de los atentados. A veces se implica a fuerzas subversivas, a veces narcotraficantes o delincuentes comunes, y hasta las mismas fuerzas del orden, como aquel caso en abril de 1991 cuando la policía o el ejército entró en Huacho disfrazada como Sendero.

Las reformas para la lucha antisubversiva

La política del Estado varía en matices, según las coyunturas, pero sigue siendo la estrategia de «tierra arrasada». En la lógica militar, un sospechoso justifica la muerte de un conjunto de personas. Tal política es el mejor alimento para el crecimiento de los grupos subversivos en tanto generan desconfianza y temor de la población en las Fuerzas Armadas y agencias policiales.

De su parte, a fines de 1991, el Presidente optó por fustigar a los organismos de defensa de derechos humanos por ser títeres del terrorismo, durante un discurso en la Base Aérea de Las Palmas, sólo semanas después de asegurar al Congreso norteamericano que tomaría medidas para asegurar el respeto a dichos derechos. Igualmente, con los poderes especiales que le otorgó el Poder Legislativo para tomar medidas económicas, lanzó un conjunto de medidas que permiten:

1) una mayor militarización en las zonas de emergencia

2) restringe la libertad de prensa, estableciendo penas de prisión para los que publiquen información que pueda afectar la guerra antisubversiva

3) los sectores público y privado tendrán que entregar la información que el nuevo Sistema de Inteligencia Nacional les solicite, bajo responsabilidad penal

4) se crean órganos de inteligencia en los ministerios de Economía, Educación, Relaciones Exteriores bajo el mando del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional

5) subordina bajo el mando militar a las autoridades políticas, organismos públicos, gobiernos regionales y municipios.

Mientras tanto, Fujimori le reclama a Amnesty International ocuparse solamente de las violaciones de los derechos humanos del Estado y no de Sendero. Amnesty, en su informe y polémica con el Presidente replicó que ellos no pueden pedirle respeto a los derechos humanos a una fuerza no reconocida como beligerante, menos aun cuando es conocida permanentemente como extremadamente violenta y sangrienta, mientras que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la paz social y por la vida de sus ciudadanos.

En suma

Un Presidente sin lealtades, con un corte más bien antidemocrático, que gusta de las confrontaciones para aseverar su poder es lo que emerge de la figura de AFF. El contrapeso es el resultado de la lucha contra la inflación, lo que le da un ranking de popularidad mayor del previsible. La gobernabilidad del país continúa en ciernes.

El travestismo de la política hecho por AFF, seguido al anterior efectuado por Alan García, permiten intuir que la debilidad de los partidos políticos es la que posibilita que los candidatos digan una cosa y actúan la contraria, sin mayor oposición.

La oposición de los partidos políticos a los impulsos autoritarios del Presidente resulta en una combinación de hostilización del Presidente al Parlamento y un fustigamiento a los partidos políticos.

El poder absoluto del Presidente genera excesos más allá del ámbito nacional, produciéndose reacciones como la de El País, de Madrid, luego de la visita presidencial, que le recordó a Fujimori que sus discursos internacionales son para hacer política exterior y no para ventilar internacionalmente los problemas domésticos.
En este panorama AFF es un Presidente al que pocos escuchan o recuerdan. Sólo su actuar político es juzgado o intuido por los ciudadanos. Lentamente se convierte en un dictador civil, despótico y autoritario, con los mismos rasgos de nepotismo que

en las dictaduras más férreas - un hermano asesor presidencial, un cuñado embajador de confianza en Tokio, su secretaria Directora del Fondo de Compensación Social -. Es un Presidente que no cree en la democracia ni en las instituciones que la representan. Pero, al otro lado, es irreductible en sus decisiones una vez que las toma. Inescrutable, es impredecible. Sólo se puede reconocer que está llevando a cabo la revolución liberal en el Perú en medio del contexto de caos más sentido de América Latina, y eso toma valor o impermeabilidad.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 118 Marzo- Abril de 1992, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**